RAE

1. **TIPO DE DOCUMENTO:** Trabajo de grado para optar por el título de ESPECIALISTA EN FILOSOFÍA CONTEMPORANEA.
2. **TÍTULO:** MODO DE EXISTENCIA DEL PODER POLÍTICO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ONTOLOGÍA SOCIAL DE JOHN SEARLE.
3. **AUTORES:** Alejandro Iván Pérez Rodríguez
4. **LUGAR:** Bogotá, D.C
5. **FECHA:** Abril de 2018
6. **PALABRAS CLAVE:** Construcción de la realidad social, ontología social, hechos institucionales, ontología del poder, poder político.
7. **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:** El artículo ilustra, desde la ontología social de John Searle, cómo se constituye el poder político, para lo cual explora la manera como ciertos hechos sociales adquieren un estatus ontológico, mediante su aplicación a problemas políticos tomados del contexto colombiano. Los resultados se exponen en tres apartados: en el primero se presenta el marco general de la teoría de la construcción de la realidad social; en el segundo, se especifican los elementos de la ontología social que permiten comprender cómo se construye la ontología del poder político; en el tercero, se ilustran las categorías identificadas a partir de hechos institucionales situados en el contexto colombiano. Finalmente, se enuncian algunas conclusiones derivadas de esta experiencia de comprensión de los modos de existencia del poder político.
8. **LÍNEAS DE INVESTIGACION:** Línea de Investigación de la USB: Filosofía Contemporanea. Campo Temático del Programa: Filosofía Analítica.
9. **METODOLOGÍA:** Análítica, orientada a la reconstrucción de la teoría de la ontología social de John Searle y a su aplicación desde la construcción de ejemplos.
10. **CONCLUSIONES:** Los mencionados conceptos permitieron explicar cómo se relaciona el poder deóntico con el poder en general y con el poder político en particular, en cuanto que el poder expresa una capacidad o habilidad que puede manifestarse a través de determinados hechos, tal como se muestra en los ejemplos analizados. La aplicación de la teoría de Searle a diversos hechos constitutivos del poder institucional posibilitó responder en qué medida puede aportar la propuesta ontológica de Searle a la comprensión del poder político en nuestro contexto.

**MODO DE EXISTENCIA DEL PODER POLÍTICO: UNA APROXIMACIÓN DESDE
LA ONTOLOGÍA SOCIAL DE JOHN SEARLE**

Alejandro Iván Pérez Rodríguez
Abril de 2018
Universidad de San Buenaventura
Departamento de filosofía
Especialización en filosofía contemporánea

Resumen

El artículo ilustra, desde la ontología social de John Searle, cómo se constituye el poder político, para lo cual explora la manera como ciertos hechos sociales adquieren un estatus ontológico, mediante su aplicación a problemas políticos tomados del contexto colombiano. Los resultados se exponen en tres apartados: en el primero se presenta el marco general de la teoría de la construcción de la realidad social; en el segundo, se especifican los elementos de la ontología social que permiten comprender cómo se construye la ontología del poder político; en el tercero, se ilustran las categorías identificadas a partir de hechos institucionales situados en el contexto colombiano. Finalmente, se enuncian algunas conclusiones derivadas de esta experiencia de comprensión de los modos de existencia del poder político.

Palabras clave

Construcción de la realidad social, ontología social, hechos institucionales, ontología del poder, poder político.

Introducción

Las preocupaciones y planteamientos de John Searle alrededor de la realidad institucional y social humana, se condensan en sus obras *La construcción de la realidad social* (Searle, 1997), en la cual desarrolla una teoría general de la ontología social, interrogando cómo construimos una realidad social, y *Creando el mundo social. La estructura de la civilización humana* (Searle, 2014), que da continuidad a la línea argumentativa en torno a la construcción de la realidad social, al proponer una teoría general de la ontología social, pero aplicándola con mayor detenimiento a cuestiones relacionadas con el poder político.

En dichas obras se proponen herramientas para el abordaje de la complejidad de los modos de existencia de la realidad institucional y social humana, las cuales, dada su pertinencia para la exploración del modo de existencia del poder político se toman como referencia para dar respuesta a la siguiente pregunta: *¿En qué medida puede aportar la propuesta ontológica de Searle a la comprensión del poder político en nuestro contexto?*

En consecuencia, el artículo pretende ilustrar, desde dicha propuesta, cómo se constituye el poder político en el proceso de construcción de la realidad social. Esta tarea conduce, a su vez, a explorar la manera como ciertos hechos sociales adquieren un estatus ontológico y qué operaciones intervienen para que ello suceda, con el fin de reconocer la lógica bajo la cual procede la construcción de los hechos sociales e institucionales. Luego, para determinar sus alcances o límites, se relacionan las categorías propuestas por Searle con realidades políticas colombianas.

Para el desarrollo de las temáticas propuestas, el artículo se organiza en tres apartados: en el primero, se presenta el marco general de la teoría de la construcción de la realidad social de John Searle, situando los elementos centrales para su aplicación. En el segundo, se especifican

los elementos constitutivos de la ontología social en tanto que permiten comprender la ontología del poder político. En el tercero, se ilustran las categorías identificadas a partir de ejemplos tomados del contexto colombiano. Finalmente, se enuncian algunas conclusiones sobre los alcances de la ontología social para la comprensión de los modos de existencia del poder político.

Marco general de la teoría de la construcción de la realidad social

En el presente apartado se exponen los aspectos fundamentales de la teoría de la construcción de la realidad social de Searle, entendida como una ontología de los hechos sociales e institucionales. Para ello, en primer lugar, se hace un recorrido por los aspectos generales de la ontología social, y, en segundo lugar, se detallan las categorías centrales propuestas por Searle para su comprensión.

Elementos generales de la ontología social.

La preocupación de Searle en torno a la constitución de la realidad social -que a su juicio es la pregunta preponderante para la filosofía contemporánea- se formula a partir de interrogantes como los siguientes:

¿Cómo podemos conciliar -si acaso es posible- la concepción del mundo descrita por la física, la química y el resto de las ciencias básicas, con lo que sabemos -o creemos saber- sobre nosotros como seres humanos?

¿Cómo es posible que en un universo enteramente constituido por partículas físicas en campos de fuerza puedan existir cosas tales como la conciencia, la intencionalidad, el libre albedrío, el lenguaje, la sociedad, la ética, la estética y las obligaciones políticas?" (2014, p. 19).

Dicha preocupación remite a la manera como facetas distintivas de la existencia humana - tales como la mente y la sociedad- pueden explicarse a partir de una realidad que está constituida por hechos físicos y qué lugar ocupa, entonces, la mente dentro de la naturaleza. En esa dirección, *La construcción de la realidad social* desarrolla una investigación centrada en los

modos de existencia de los hechos sociales y la manera como estos se relacionan con otros hechos existentes. La necesidad de una ontología general que proporcione una base más sólida para comprender la realidad en general y los hechos sociales en particular se expresa del siguiente modo:

Vivimos en un mundo compuesto enteramente por partículas físicas en campos de fuerza. Algunas de ellas están organizadas como sistemas. Algunos de esos sistemas son seres vivos, y algunos de esos seres vivos han adquirido evolucionariamente consciencia. Con la consciencia viene la intencionalidad, la capacidad del organismo para representarse objetos y estados de cosas mundanos. La cuestión es ahora: ¿cómo podemos dar cuenta de hechos sociales dentro de esta ontología? (1994, p. 26)

Esta concepción de la ontología general parte de los siguientes supuestos que se enuncian en el primer capítulo de la obra: i) la realidad social se construye; ii) los hechos institucionales tienen una *estructura lógica*; iii) los hechos institucionales son dependientes de las creencias, deseos y necesidades cognitivas de los humanos y de un modo o de otro dependientes del acuerdo humano; iv) la teoría de la construcción de la realidad social se sustenta en que los hechos institucionales y, por consiguiente, la realidad social procede de acuerdo con una lógica de atribución colectiva de funciones, la existencia de instituciones humanas, la distinción entre los hechos brutos y los ya enunciados; v) la estructura de la realidad social resulta invisible; vi) la realidad social es creada por nosotros para nuestros propósitos. El núcleo central de esta obra es, pues, la distinción entre hechos brutos y hechos institucionales, así como la estructura de los hechos institucionales.

En primer término, Searle señala que los hechos brutos son todos aquellos hechos de la realidad que existen con independencia de la mente humana, de las necesidades, las creencias, los deseos y los intereses de los humanos. Aquellos que se podrían considerar, en cierto modo, hechos físicos. Si tomamos, por ejemplo, el afiche de campaña del plebiscito sobre el Acuerdo de

Paz con las FARC, se observa que éste posee rasgos intrínsecos, que existen independientemente del observador, tales como el papel, la tinta, los emblemas, los signos, los logos, la materia y su composición. Se les pueden atribuir rasgos y propiedades determinadas, pero, en sí mismos, carecen de atribuciones de intencionalidad.

Por el contrario, los hechos institucionales comprenden todos aquellos hechos de la realidad que son producto de los acuerdos humanos, son concebidos como resultado de una construcción social entre los miembros de una sociedad y, por lo tanto, son hechos sociales. Así, del mismo modo que el afiche referido posee unos rasgos físicos intrínsecos, independientes del observador -hechos brutos- también posee rasgos derivados de una intencionalidad y de una lógica de atribución colectiva de funciones, asignadas según los intereses de los humanos en torno al SI o al NO. En este caso, se atribuyó a quienes eran partidarios de refrendar el Acuerdo de Paz con las FARC simbolizaciones y representaciones relacionadas con el ateísmo, la ideología de género, la destrucción de la familia y la inducción a la homosexualidad, entre otros rasgos que no estaban contemplados en el plebiscito, y en oposición se asignó a los defensores de no firmar el mencionado Acuerdo, atribuciones referidas a la defensa Dios, la familia, la propiedad privada, el trabajo, etc.

De esta distinción entre hechos brutos e institucionales se infiere que los hechos brutos son designados por medio de lenguaje, aunque no hagan parte de los hechos sociales, los cuales comportan acuerdos entre humanos y, por consiguiente, entrañan atribución de funciones e intencionalidades colectivas a determinados hechos Searle señala que la simbolización es el rasgo esencial del lenguaje que se relaciona con la constitución de los hechos institucionales, ya que las palabras son mecanismos simbólicos convencionales mediante los cuales se representa algo que va más allá de ellos mismos y lo hacen públicamente comprensible.

Por consiguiente, existen hechos independientes del lenguaje y hechos que dependen de él. El hecho de que *el nevado del Ruiz está perdiendo nieve en su pico* o que *el río Magdalena atraviesa el país de sur a norte* son hechos independientes del lenguaje, en cuanto existen sin depender de un hecho lingüístico para su existencia. Si se eliminara el lenguaje, el nevado del Ruiz como volcán-nevado seguirá existiendo -independientemente de su denominación- pero, si se borrara el lenguaje desaparecería, al mismo tiempo, el enunciado: *el nevado del Ruiz está perdiendo nieve en su pico*. Gracias al lenguaje es posible tanto la designación como la enunciación de la realidad -hechos brutos- como la constitución de los asuntos sociales y culturales -hechos sociales- y los hechos institucionales sólo pueden existir dentro de las instituciones humanas, entre ellas, la institución del lenguaje. Searle señala que

El lenguaje es una parte constitutiva de la realidad institucional. Para que una cosa sea dinero, propiedad, matrimonio o gobierno, la gente debe tener los pensamientos que corresponden. Pero para tener tales pensamientos adecuados es preciso tener los medios para pensar esos pensamientos, medios que son de orden simbólico o lingüístico (Searle, 2005, p. 106).

En consecuencia, la relación entre lenguaje y pensamiento constituye un punto decisivo para comprender los mecanismos simbólicos (sean éstos palabras u otro tipo de símbolos) utilizados por los humanos para la existencia de hechos institucionales, ya que mediante el lenguaje se crean símbolos lingüísticos que son convencionales, de carácter público, y dependientes de un sistema de representación socialmente aceptado.

Componentes de la ontología social.

Para explicar lo expuesto, Searle propone considerar los siguientes principios como constitutivos de la ontología social: “la asignación de función, la intencionalidad colectiva y las reglas constitutivas” (1997, p. 32). Estos principios son ampliados con la introducción de “el trasfondo de capacidades que los humanos tienen para lidiar con el entorno” (p.32). Tales

elementos permiten comprender cómo esa realidad que existe independientemente de nuestra representación interior, se transforma en realidad social cuando le atribuimos (asignamos o imponemos) una determinada función, del mismo modo que creamos objetos para que cumplan una cierta función y atribuimos funciones a determinados fenómenos.

El autor sostiene que hay un principio subyacente en la ontología social -el principio de la asignación de funciones- para el cual empleamos “un mecanismo lingüístico formal y lo aplicamos una y otra vez con diferentes contenidos” (Searle, 2010, p. 24). Puesto que la realidad como un sistema que incorpora distintos hechos, físicos o sociales, se genera una jerarquización que va de *X* a *Y*, donde *X* representa un nivel bruto (no hay ningún rasgo estructural que baste por sí mismo para determinar la función) mientras que, *Y* representa un nivel institucional, mediante el cual se crea un estatus que añade rasgos físicos a *X* y éste existe si la gente cree que existe, es decir, media una convención social y un modo de representación de dicha realidad. Esto significa que el rasgo principal que distingue a los humanos de otras formas de realidad es que tenemos la capacidad de imponer funciones a objetos y personas que, por sí mismas, no podrían adquirirlas exclusivamente con base en su estructura física. “La ejecución de la función requiere que haya un estatus¹ colectivamente reconocido, y únicamente con base en dicho estatus es que la persona o el objeto que lo tiene puede ejecutar la función en cuestión” (p. 24), tal como se expresa más adelante con la constitución del poder político encarnado en el estatus de alcalde de la ciudad, por ejemplo.

De este modo, la asignación de funciones remite a la capacidad pragmática de atribuir colectivamente ciertas funciones a determinados objetos que no las poseen intrínsecamente, sino como producto de la atribución normativa en determinado contexto y con cierta intencionalidad.

¹ En algunas traducciones se mantiene la designación en inglés *status* (1997) y en otras se estatus, sin embargo, hacen referencia al mismo concepto.

De allí que el autor afirme que “la intencionalidad colectiva nos permite la asignación colectiva de una función” (Searle, 2010, p. 69) y es mediante esta acción como creamos funciones de estatus, “que marcan la diferencia entre realidad social, en general, y lo que denomino realidad institucional. Las instituciones humanas son cuestión de funciones de estatus” (p. 70).

En cuanto a la intencionalidad colectiva, esta reposa en la capacidad que tienen los seres humanos de ser partícipes de los comportamientos cooperativos y, en esa medida, de compartir actitudes con otros miembros de su misma especie. En palabras de Searle, “la intencionalidad colectiva es la intencionalidad compartida por distintas personas, y solo en la medida en que pueden compartirse intenciones para hacer cosas puede haber creencias y deseos compartidos” (2010, pp. 67-68). Por consiguiente, la intencionalidad colectiva constituye un presupuesto básico de toda realidad social, en la medida en que los miembros de una sociedad “no sólo se comprometen en una conducta cooperativa, sino que comparten también estados tales como creencias, deseos e intenciones. Además de la intencionalidad individual, hay también intencionalidad colectiva”² (Searle, 1997, p. 41).

Como puede apreciarse, para que las funciones de estatus se cumplan se requiere una aceptación o reconocimiento colectivo del objeto o de la persona como poseedor de dicho estatus³. En tanto la intencionalidad colectiva hace posible la función de estatus, ello supone una notable capacidad de cooperar en los humanos; cooperación que se expresa no solamente en las acciones que se realizan, sino también, en las actitudes, los deseos y las creencias compartidas.

² Para el autor “todos los esfuerzos por reducir la intencionalidad colectiva a la intencionalidad individual están condenados al fracaso. La intencionalidad colectiva es un fenómeno biológico primitivo que no puede ser reducido a, o eliminado en favor de, otra cosa (...) Hay una razón profunda que explica por qué la intencionalidad colectiva no puede ser reducida a la intencionalidad individual. El problema que hay con la fórmula de creer que yo que tú crees que yo creo, etc., y creer que yo creo lo que tú crees, etc., es que no consigue una agregación suficiente para un sentido de *colectividad*. Ningún conjunto de ‘Yo – consciencias’, aún suplementado con creencias, resulta agregado, en una ‘nosotros conciencia’. El elemento crucial en la intencionalidad colectiva es un sentido del hacer (desear, creer, etc.) algo juntos, y la intencionalidad individual que cada una de las personas tienen *deriva de* la intencionalidad colectiva que todos comparten” (1997, p. 42).

³ En la *Construcción de la realidad social* Searle señala la necesidad de aceptación colectiva; pero para no confundir aceptación con aprobación, en *Creando el mundo social*, aclara que tal como él la interpreta, la aceptación implica que puede ir desde la adhesión entusiasta hasta la admisión a regañadientes, o incluso a la incapacidad de poder hacer algo para rechazarlo, es decir, se trata de algo que hay que admitir como aceptado así no se le apruebe, por tal razón, en el segundo trabajo, quiere evitar este malentendido e incluye la opción de elegir entre reconocimiento o aceptación.

Esto es importante destacarlo porque solamente en virtud del reconocimiento o la aceptación es como se constituyen los hechos institucionales, puesto que “las funciones nunca son intrínsecas; se asignan según los intereses de los usuarios y los observadores” (1997, p. 37).

La existencia de conductas cooperativas en determinada realidad social remite a reglas y procedimientos, mediante los cuales se construye una realidad social y Searle las clasifica como constitutivas y regulativas. Las primeras crean los hechos, las segundas regulan las actividades previamente creadas. Así, cuando una función se vuelve habitual, señala Searle, se constituye en una regla constitutiva como “*X cuenta como Y en el contexto C*” (2010, p. 70). A su vez, dicha función produce en los hechos institucionales una serie de encadenamientos, puesto que: “nunca tenemos un hecho institucional aislado, sino una serie de hechos institucionales entrelazados” (p. 70), ya que las instituciones se interconectan unas con otras. Así, por ejemplo, un hecho institucional como la toma de posesión de un mandatario se conecta con otro hecho institucional representado en el marco legal que fija reglas y procedimientos para que el proceso de la elección cuente como tal y se concatena, a su vez, con una serie de nuevos hechos tales como compromisos, obligaciones, responsabilidades, etc. inherentes al ejercicio de su cargo.

Vale aclarar que si bien “la estructura de las instituciones humanas es una estructura de reglas constitutivas” (1997, p. 139), no todos los que participan en las instituciones son habitualmente conscientes de dichas reglas, llegando incluso a tener falsas creencias sobre su naturaleza. Así, los feligreses de una comunidad religiosa, los miembros de un partido político o los integrantes de una institución universitaria, desconocen la estructura de la misma, o sólo parcialmente son conscientes de ella. Y si esto es así, ¿cómo se explica la ignorancia del sistema de reglas por quienes han creado o participado en la evolución de la institución y qué papel cumplen las reglas?

Para la explicación de este tipo de problemas, el autor recurre a la noción de *trasfondo*, planteado inicialmente en su obra *Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de la mente* (1992), el cual retoma en *La construcción de la realidad social* con la siguiente tesis: “los estados intencionales sólo funcionan dado un conjunto de capacidades del trasfondo, capacidades que no consisten ellas mismas en fenómenos intencionales” (1997, p 141) sino que son condiciones de existencia de los estados intencionales. Searle plantea que: “el concepto de ‘*trasfondo*’ [es] el conjunto de capacidades (habilidades, disposiciones, tendencias y en general estructuras causales) no intencionales o preintencionales (real o potencialmente conscientes, son argumentos razonables) que hacen posibles los estados intencionales de función.” (2014, p. 141). A su vez, las capacidades se entienden como causación neurofisiológica. Así, cuando se afirma que *alguien es capaz de hacer un artículo sobre la teoría de Searle*, al mismo tiempo se está afirmado que *alguien cuenta con determinadas condiciones neurofisiológicas que funcionan causalmente en la producción de un determinado fenómeno intencional, en este caso, la elaboración de un texto sobre cierto autor.*

El trasfondo conlleva un cierto tipo de conocimiento del mundo, sobre cómo funciona, que no está incluido en el enunciado de un significado (capacidades, disposiciones, potencialidades o *habitus* en Bourdieu) pero que permite su interpretación lingüística. Así, por ejemplo, hechos como: *me encontré un billete de \$100.000* o *mi hermana compró un apartamento*, sólo pueden tener existencia si en el contexto existen ciertas creencias y otras actitudes mentales relacionadas con los enunciados, tales como creer que un papel-billete funciona como dinero, que posee un determinado valor y que en Colombia existen billetes de esa denominación; o también, que en esta sociedad alguien, que puede ser mi hermana, tiene el

derecho a adquirir propiedades (como un apartamento) y cuenta con los recursos (ingresos, préstamos, etc.) para hacerlo.

Además de hacer posible la existencia del hecho de que *X* (papel) funciona como *Y* (moneda) en *C*; o *X* (mi hermana) funciona como *Y* (propietaria) de un apartamento en *C*, el trasfondo también estructura la consciencia, lo cual significa que vemos y comprendemos las cosas con una cierta familiaridad, sin mayor esfuerzo. Así, por más sofisticado que sea el diseño de un mueble, captamos que se trata de una silla o de una mesa y no solamente lo interpretamos semántica y perceptivamente, sino que también interpretamos cada fenómeno desde un conjunto de creencias y deseos derivados, por ejemplo, del cine, la televisión, de lo que hemos leído y vivido y eso que hace parte del trasfondo, afecta nuestra forma de verlos o leerlos.

Lo anterior genera ciertas disposiciones motivacionales que condicionan la estructura de nuestras experiencias; es por eso que nuestros deseos y creencias ayudan a estructurar las experiencias, en tanto constituyen un conjunto de disposiciones motivacionales. Esto explicaría que, si creemos que el senderismo y la ecología contribuyen a un mejor vivir, entonces nos inclinaremos por un candidato a la alcaldía que incluya en su programa electoral aspectos relacionados con esas (mis) creencias o esos (mis) deseos. Pero si, además, mis experiencias previas con candidatos de izquierda han sido negativas, sin lugar a dudas atribuiré a todos los candidatos de izquierda condiciones semejantes a ellos, que no motivarán mi deseo de votar por ellos, así su programa me parezca interesante.

Tal como lo plantea Searle “mis capacidades de trasfondo determinan un conjunto de disposiciones que determinan la naturaleza de mi experiencia” (1997, p. 148). Esto significa que el trasfondo facilita ciertas clases de predisposición: las frecuentes noticias sobre asaltos y robos ocurridos en el transporte público de Bogotá SITP, hacen que si me traslado de noche en un bus

de este servicio voy predispuesto a la inseguridad y estaré alerta ante cualquier movimiento que considere sospechoso. No ocurriría lo mismo si viajo en avión o un carro particular, porque no estaría predispuesto a que ocurran hechos semejantes. En consecuencia, el trasfondo dispone a la realización de cierto tipo de conductas, como, por ejemplo, en las últimas décadas, a la emisión de chistes políticos, pero no de aquellos que hacen discriminaciones raciales, de género, o que aluden a los defectos de la gente, porque hay elementos del trasfondo que han estructurado las predisposiciones de mi experiencia.

Y si el trasfondo determina la naturaleza de mi experiencia y la asignación de funciones de estatus a través de la intencionalidad colectiva, se entiende que la creación de hechos institucionales es una estructura de relaciones de poder, tal como lo señala Searle, “incluyendo los poderes positivos y negativos, condicionales y categóricos, colectivos e individuales” (Searle, 2014, p. 106). Por consiguiente, en la ontología social las funciones de estatus son vehículos de poder en la sociedad, en cuanto “aceptamos las funciones de estatus y, al aceptarlas, aceptamos una serie de obligaciones, derechos, responsabilidades, deberes, autorizaciones, permisos, requisitos, etc. Para abreviar, denomino a todos ellos poderes deónticos” (p. 70). Tales razones son las que mueven a la acción como hechos esenciales de la sociedad humana, dado que las estructuras deontológicas son las que movilizan la acción, con independencia del deseo.

En todo este proceso se destaca la función del lenguaje como capacidad que permite a los seres humanos la representación de la realidad. Searle precisa al respecto: “más importante aún, les permite representar no solo lo que es, sino lo que era, lo que será y lo que le gustaría que fuese. Más sorprendentemente todavía, les permite mentir. Les permite representar algo como si fuera el caso, aunque sepan que no lo es.” (Searle, 2010, p. 72). El lenguaje tiene una importancia crucial en la constitución de la realidad institucional ya que la aceptación colectiva

“tiene que ser lingüística y simbólica en el más amplio sentido, puesto que no hay nada más que señale la función de estatus” (p. 72).

Searle atribuye al lenguaje cuatro funciones esenciales en la constitución de los hechos institucionales. En primer lugar, los hechos institucionales exigen ciertas formas de simbolización ya que esta constitución acarrea “poderes deónticos porque no hay nada en los hechos físicos puros que conlleve intrínsecamente la deontología” (Searle, 2010, p. 73). En segundo lugar, las formas de las funciones de estatus están directamente relacionadas con poderes deónticos: “Son una cuestión de derechos, deberes, obligaciones, responsabilidades, etc.” (p. 73). En tercer lugar, “sin lenguaje no hay deontología. Las sociedades humanas requieren deontología y la única manera en la que pueden hacerlo es teniendo lenguaje.” (p. 73). En cuarto lugar, “una de las funciones cruciales del lenguaje es el reconocimiento de las instituciones como tales” (p. 74), ya que éstas solamente pueden ser reconocidas en tanto tengan un modo de existencia simbólico y lingüístico.

El marco expuesto sobre la teoría de Searle, permite comprender los modos de construcción de la realidad y sitúa, las referencias centrales para la constitución de una ontología social, teniendo presente que las instituciones, por ejemplo, los gobiernos o las corporaciones, dependen y se derivan de los fenómenos mentales y de la conducta de los seres individuales, en tanto son realidades interdependientes socialmente creadas y constituidas por los diversos fenómenos que componen el mundo, ya que, que “el mundo se compone de diversos fenómenos que forman parte de un único mundo” (2014, p. 20).

Ontología social, hechos institucionales y poder político.

Según lo expuesto, el presente apartado se ocupa de relacionar los presupuestos de la ontología social con hechos sociales del contexto del poder político. Los hechos institucionales

son aquellos que dependen del acuerdo o de la aceptación humanos, aseveración que reposa en la distinción que Searle establece frente a la realidad entre los hechos que dependen de las decisiones humanas y aquellos que existen con independencia de ellas. En el primer caso, se trata de hechos sociales o institucionales y en el segundo de los hechos brutos.

De acuerdo con Searle, su teoría de la construcción de la realidad social también contiene una concepción de lo político y del poder político. Dicha concepción se condensa en la siguiente afirmación: “todo poder político es cuestión de funciones de estatuto, razón por la cual todo poder político es poder deóntico. Los poderes deónticos tienen que ver con los derechos, los deberes, las obligaciones, las autorizaciones, los permisos, la autoridad, etcétera” (Searle, 2005, p. 107).

Esto significa, en primer lugar, que la creación de un hecho institucional consiste en imponer un estatus y con él una función a alguna entidad que no tenía previamente esa función de estatus. En general, la creación de estatus “consiste en conferir algún poder nuevo” (1997, p. 108), que lo capacita para ejercer una función, un poder que antes no tenía y puede ser una autorización, un permiso, una habilitación o una negación, a hechos que están mediados por un acuerdo colectivo. En tal sentido, “mediante el acuerdo colectivo podemos incrementar e incrementamos la riqueza de la gente y podemos conferir a la gente poder de vida o muerte sobre nosotros (...) con este mecanismo podemos crear todas aquellas formas de poder, pero sólo aquellas formas en las que el reconocimiento o la aceptación colectivos del poder sean constituyentes de tenerlo” (pp. 108-109).

Este mecanismo es aplicable a una gran variedad de hechos institucionales y no requiere que los participantes sean conscientes de lo que está ocurriendo realmente, pues así como muchos hechos institucionales han sido codificados en leyes explícitas y tienen un estatus

normativo con su función correspondiente, otros hechos se vuelven institucionales por la fuerza o la imposición colectiva, sin que medie una ley o un hecho institucional explícito, aunque en todos los casos siempre se requiere una intencionalidad colectiva cotidiana. Según Searle, esta intencionalidad colectiva impone una función de estatus, bajo la fórmula: *X cuenta como Y en C* (regla constitutiva). Entonces, es a partir de la intencionalidad colectiva como se asigna un nuevo estatus a algunos fenómenos, lo cual trae consigo una función, que no depende de los rasgos intrínsecos del fenómeno en cuestión. Por ejemplo, si tomamos el fenómeno de la Jurisdicción, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, constituye un hecho distinto al de la Jurisdicción Ordinaria y esta nueva asignación de funciones crea un nuevo hecho institucional que ha sido concebido y aprobado por acuerdo humano.

Claramente, la regla constitutiva *X cuenta como Y en C*, aporta la comprensión de la manera como se crea un nuevo hecho institucional. Esto, teniendo en cuenta que la intencionalidad colectiva impone ese estatus y su correspondiente función a *Y*, es decir, a un fenómeno designado con el término *X*. En la teoría del Searle la locución *cuenta como* implica la existencia de un acuerdo y la disposición a aceptarlo en el marco de un contexto específico (la aprobación parlamentaria, por ejemplo).

Sin embargo, no siempre la creación de hechos institucionales cuenta con la participación consciente de los participantes ¿por qué ocurre esto? Porque existe un trasfondo (cultural, social y político) según el cual se da por sentada la existencia de instituciones políticas encargadas de imponer ciertos estatus y asignar determinadas funciones, es decir, de crear hechos institucionales o de “generar cierta ontología” (Searle, 1997, p. 64).

Por otra parte, “en la evolución de la institución, los participantes no necesitan tener conscientemente presente la forma de la intencionalidad colectiva merced a la cual imponen

funciones a los objetos” (Searle, 1997, p. 64). Incluso, pueden atribuir funciones que pueden no ser verdaderas porque el hecho institucional se crea y se mantiene en el tiempo. Retomando el anterior ejemplo, así hayan evolucionado los hechos institucionales, la gente sigue creyendo que *X* (Jurisdicción Ordinaria) sigue siendo *Y* en el posacuerdo. Searle señala que “le gente continúa reconociendo en la *X* la función de estatus y el hecho institucional se crea y se mantiene. No tienen por qué reconocer, además, que lo reconocen así y pueden albergar toda clase de falsas creencias ulteriores acerca de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo” (p. 64).

Cada vez que la función de estatus según la formula *X cuenta como Y en C* hace parte de un hecho político institucional, dicha función adquiere un estatus normativo. Por lo cual esta regla general crea la posibilidad de abusos que existen en virtud de la regla constitutiva. En efecto, Searle señala que “la posibilidad de formas de abuso es característica de los hechos institucionales” (Searle, 1997, p. 64). Así, por ejemplo, la falsificación de la moneda, la existencia de falsos sacerdotes, la aprobación de una ley o norma que tiene vicios de forma y fondo o el ejercicio médico con un título falso, son expresiones del abuso derivado de la regla constitutiva. Recientemente, los cirujanos plásticos que hicieron valer un diplomado por un título de especialización, sin contar con la experticia acreditada por dicho título, adquirieron un estatus para ejercer ciertas funciones, aunque no contaban con las condiciones para desempeñar cabalmente aquellas atribuidas a dicho estatus. “El acuerdo colectivo respecto de la posesión del estatus es constitutivo de la posesión del estatus, y poseer el estatus es esencial para cumplir la función asignada a ese estatus” (p, 67).

De lo anterior se desprende, en primer lugar, que el lenguaje es fundamental en el proceso de constitución de los hechos institucionales y políticos en cuanto la imposición de funciones de estatus está relacionada directamente con enunciados lingüísticos y éstos son parte constitutiva

del hecho. Volviendo al ejemplo de la JEP, la denominación de *jurisdicción especial*, con un adjetivo que antes no tenía, genera nuevo estatus y función distintivos de la justicia ordinaria y, en consecuencia, crea un ámbito de aplicación con restricciones y reglas específicas, ya que en los hechos institucionales los conceptos lingüísticamente expresados, son ahora parte de los mismos hechos que hemos creado. Por lo cual, los hechos institucionales son claramente hechos de lenguaje.

En segundo lugar, en general se entiende que las funciones de estatus son asuntos de poder: poderes simbólicos, poderes deónticos, honoríficos, entre otros. Según Searle, el estatus *Y* puede imponerse a distintas categorías ontológicas de fenómenos tales como gente, objetos o acontecimientos que actúan en relaciones sistemáticas. “El contenido de la intencionalidad colectiva en la imposición de la función de estatus será típicamente que un sujeto humano singular o plural, tiene algún poder positivo o negativo, condicional o categórico” (p. 110).

Con fundamento en tales distinciones, el autor establece varias categorías de poder en las funciones de estatus: i) *Poderes simbólicos*, son aquellos que nos capacitan para representar la realidad y crear significados con determinada intencionalidad. Searle afirma que “la simbolización es esencial para las otras formas de imposición de función institucional (...) no podemos imponer derechos, obligaciones, etcétera sin palabras o símbolos.” Así, el sentido que se otorga a los colores rojo, azul, verde o amarillo en el contexto de los partidos políticos de Colombia deviene de una atribución de intencionalidad colectiva que va más allá de estas propiedades físicas y representa un sistema de ideas, valores o ideales políticos de los partidos liberal, conservador, verde o polo democrático. ii) *Poderes deónticos*, son los que se derivan de la creación de derechos y obligaciones. Según la regla *X cuenta como Y*, significa que, *Y* confiere o niega poder, impone derechos, responsabilidades, obligaciones, deberes, privilegios, castigos o

permisos, entre otros fenómenos deónticos. Por lo tanto, quien se posesiona en un cargo público, por ejemplo, jura cumplir con la Constitución y la Ley o, de lo contrario, también acepta que el peso del poder público recaiga sobre sí, dado el incumplimiento de sus promesas y obligaciones y la consecuente pérdida del poder deóntico; iii) Poderes honoríficos, son aquellos que derivan del estatus por sí mismo. En consecuencia, los honores (y los deshonores) sirven para tener estatus valorados (o desvalorados) no por las ulteriores consecuencias que puedan traer consigo, entre otros. Ser elegido presidente honorario de la Asociación de Politólogos para efectos de la Asamblea Anual es un poder honorífico cuyo valor estriba en el estatus mismo, pues no trasciende más allá de la Asamblea.

Pese a sus diferencias, las anteriores categorías de poder comparten la asignación de estatus, que conlleva poderes de diverso alcance y permiten colegir que siempre el poder es

Poder de hacer algo o de impedir que algún otro haga algo, el contenido proposicional de las funciones de estatus de poder es siempre en parte que (*S hace A*) en donde hay que sustituir *S* por una expresión referida a un individuo particular o a un grupo, y *A* por el nombre de un acto, una acción o una actividad” (1997, p. 116).

Siguiendo esta lógica, Searle señala que en la estructura primitiva de la intencionalidad cuando *X cuenta como Y en C*, nosotros aceptamos que (*S tiene poder [S hace A]*). En todos estos casos, el contenido de *Y* se impone a *X* por aceptación colectiva y, las aceptaciones colectivas, tales como creencias o reconocimientos deben tener un contenido referido a alguna modalidad del poder condicional en la que el sujeto se relaciona con algún tipo de acción o curso de acciones.

En síntesis, para el reconocimiento de la intencionalidad colectiva es preciso identificar las formas específicas de poder relacionadas con la realidad social e institucional humana (poder deóntico) desde hechos generales como obligaciones, autorizaciones, permisos y requisitos.

Tales conceptos permiten explicar cómo se relaciona el poder deóntico con el poder en general y con el poder político en particular, puesto que el poder expresa una capacidad o habilidad que puede manifestarse a través de determinados hechos.

Con base en los conceptos esbozados, a continuación, se explora de qué modo hechos colectivos, como el poder en tanto hecho institucional, existen únicamente en virtud de una aceptación o reconocimiento colectivo que se construye mediante el lenguaje.

Creación y constitución de poderes institucionales

En este último apartado, se relacionan los presupuestos de la ontología social con hechos sociales del poder político colombiano, para ilustrar cómo procede el nacimiento de una institución, cómo se constituye un poder institucional gubernamental y cómo se crean poderes por fuera de la institucionalidad.

Cómo nace una institución.

Recordemos que la creación de hechos institucionales supone la existencia de una institución que lo permite, en la cual la intencionalidad colectiva impone un estatus especial a algún fenómeno. Según Searle, esas instituciones consisten siempre en reglas constitutivas (prácticas, procedimientos) que tienen la forma *X cuenta como Y en C*, donde el término *Y* impone un nuevo estatus al fenómeno nombrado por el término *X*, y ese nuevo estatus trae aparejada una función que no puede cumplirse solo en virtud de los rasgos físicos intrínsecos nombrados por el término. Por lo tanto, la función requiere estatus para poder cumplirla y el estatus requiere intencionalidad colectiva, la cual incluye una aceptación continuada del estatus con su correspondiente función o un abanico de funciones, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo.

Hay una comunidad muy primitiva en la que no existe aún ninguna institución en el sentido estudiado, es decir, no se cuenta con una entidad que adquiere un estatus, unas funciones inherentes a él y un sistema concatenado de funciones y jerarquías que la mantienen en el tiempo.

Seguramente, dicha comunidad ya ha desarrollado un lenguaje, lo cual le ha permitido designar la realidad, representarla simbólicamente, interactuar, tomar decisiones frente al peligro, organizarse, protegerse y garantizar la supervivencia del grupo. En esa lucha con la naturaleza y con otras tribus, sin duda, debe haber sobresalido alguno de sus miembros bien por su fuerza, bien por su inteligencia para resolver los problemas cotidianos y, en consecuencia, la comunidad ha reconocido la importancia de contar con un líder. Colectivamente existe una conciencia de esa necesidad porque es difícil que todos opinen y tomen decisiones que no conducen a buenos resultados, pero también se requiere una cooperación y un mecanismo nuevo para representar la intencionalidad colectiva.

Así nace, probablemente, el primer hecho constitutivo del poder en una institución gubernamental: X (el más sabio, el más fuerte) cuenta como Y (el líder de la comunidad) en C (la tribu o comunidad determinada). Supongamos que para darle preeminencia lo llaman Cacique. En tal sentido Searle distingue tres elementos: la creación inicial del hecho institucional, su existencia continuada y su representación oficial (normalmente lingüística). A su vez, ser Cacique significa adquirir un cierto estatus -poder deóntico- representado en compromisos, obligaciones, responsabilidades, beneficios (por ejemplo, garantizar la unidad de la comunidad, tener hijos, proteger a la tribu de invasores), los cuales se mantienen a lo largo del tiempo bajo el cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones en respuesta a la intencionalidad colectiva. Así, también se puede perder la condición de Cacique si se rompe una regla al

emparentarse con alguien de otra tribu, si comete un acto de cobardía, si se alía con los enemigos, etc. De acuerdo con Searle, este proceso de constitución del nuevo estatus institucional toma mayor relevancia y se requiere un mayor número de actos de habla explícitos según “reglas estrictas. Y dichos actos de habla son ellos mismos hechos institucionales.” (1997, p. 128).

Por supuesto que, este embrión institucional de poder gubernamental va a continuar expandiéndose según las condiciones y necesidades de la comunidad, la respuesta a nuevos hechos brutos físicos y sociales y, en la medida en que se consolide como institución, surgirán abanicos de funciones, jerarquizaciones, condiciones y requisitos, haciendo parte de un sistema de relaciones que se irán complejizando y conduciendo a modificar los existentes y crear nuevos hechos institucionales conservándolos, en el marco del hecho institucional inicial, a lo largo del tiempo. Según Searle, “El reconocimiento de los individuos directamente implicados y un número suficiente de la comunidad garantiza la existencia de dichos hechos. Por lo tanto, debe darse una “aceptación continuada de estatus o estos hechos dejan de existir en la sociedad” (1997, p. 128).

Cómo se constituye un poder institucional gubernamental.

En las democracias representativas el ejercicio del poder gubernamental procede como un hecho institucional, mediante el cual los gobernantes adquieren un estatus deóntico relacionado no sólo con un poder-hacer sino también con un deber-hacer, y a partir de dicho estatus se autorizan sus posibilidades de actuación bajo un conjunto de condiciones y reglas que conforman el sistema electoral.⁴ En el sistema de Colombia todo ciudadano colombiano que cumpla con los

⁴ En Colombia dichas condiciones están fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento del mandato constitucional y de las normas que expedidas para su desarrollo. Consagra la Constitución Política de 1991 (Artículo 265) que este organismo está a cargo de la inspección y vigilancia suprema de la organización electoral y, particularmente, le corresponde “efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar”.

requisitos para ejercer determinado cargo de elección puede postularse. Igualmente, según la Constitución Política de Colombia, los miembros del Congreso de la República, representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común y su elección se realiza por votación directa de los colombianos quienes son convocados a las urnas cada cuatro años, el segundo domingo del mes de marzo. Para ser elegido Senador “se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección” (art. 172). Para ser elegido Representante a la Cámara se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección (art. 177).

La Constitución Política de Colombia, también determina un conjunto de restricciones para aspirar a una curul en el Congreso de la República y el Parlamento Andino (art. 179): haber sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; haber ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección; haber intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección; haber perdido la investidura de congresista, entre otras.

Retomando la teoría de Searle, los hechos institucionales no existen de forma aislada sino como parte de un conjunto de relaciones sistemáticas con otros hechos institucionales. Así, la validez de una elección como la de presidente de la república, congresista o alcalde, y el hecho de que determinada persona cuente como tal bajo determinadas reglas y condiciones, supone la existencia de un sistema político, además, que los miembros de una comunidad den por sentada

la existencia de dichas instituciones. En dicho marco, ellos pueden participar en el sistema mediante el voto para que un cierto ciudadano pueda inscribirse como candidato a cualesquiera de dichos cargos, siempre y cuando llene una serie de requisitos y condiciones. Tales reglas son parte constitutiva del sistema electoral y operan también para nuevas acciones derivadas del cumplimiento de las anteriores, como en el caso de la elección y posterior posesión de un cargo de elección popular.

Por lo anterior, el hecho institucional de que *X ha sido elegido como Y en C*, supone que X funciona como Y (se constituye como Y) porque ha cumplido las condiciones y requisitos establecidos en C. El cumplimiento de esta regla constitutiva supone para Y la adquisición de una serie de compromisos y obligaciones (estatus deóntico), tales como cumplir fielmente la Constitución y las leyes vigentes en C, el programa de gobierno, las normas particulares de la dependencia a su cargo, etc., y dicho hecho se realiza cuando jura al momento de la ceremonia de posesión de Y para el ejercicio de C. De allí que el elemento lingüístico sea parcialmente constitutivo del hecho institucional, como en este caso, prestar juramento, firmar un acta de posesión, suscribir un programa, etc. Además, como lo enfatiza Searle, en la creación de hechos institucionales “La función misma es cumplida sólo como un asunto de cooperación humana (...) y, la imposición colectiva de funciones se da cuando la función sólo puede ser cumplida merced al acuerdo o la aceptación colectivos” (1997, p. 56)

En cuanto al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el Decreto 1421 de 1993 -Estatuto Orgánico de Bogotá- se fijan las reglas para la elección de este cargo mediante el voto popular.

Al respecto, el artículo 36 establece que:

El alcalde mayor será elegido popularmente para un período de cuatro (4) años, en la misma fecha en que se elijan concejales y ediles y no será reelegible para el período siguiente. Para ser elegido se exigen los mismos requisitos que para ser Senador de la República y haber residido en el Distrito durante los tres (3)

años anteriores a la fecha de la inscripción de la candidatura. Los mismos requisitos deberá reunir quien sea designado en los casos previstos por este Decreto. El alcalde tomará posesión de su cargo ante el juez primero civil municipal; en su defecto, ante uno de los notarios de la ciudad.

En este sistema electoral, la creación del hecho institucional de la posesión del alcalde para ejercer el cargo implica, ante todo, la existencia de una institución humana -en este caso, el sistema político-electoral colombiano-, con sus correspondientes marcos de actuación legalmente constituidos, que exige el cumplimiento de requisitos y condiciones señalados en las normas vigentes para poder habilitar el funcionamiento de la regla constitutiva según la cual *X cuenta como Y en C*.

Este proceso procede de forma iterada dado que X tiene que ser habilitado previamente por el CNE como candidato para optar a la alcaldía, lo cual implica determinar si el candidato cumple los requisitos constitucionales y legales, o si cuenta con alguna inhabilidad que le impide serlo, y la aceptación individual y colectiva de la existencia de un estatus deóntico que impone no sólo derechos sino también obligaciones a las partes y, así sucesivamente. Además, tal hecho también supone la intencionalidad colectiva que asigna un nuevo estatus a determinada persona, quien pasa de ser candidato a ser mandatario, dando lugar a la constitución de un nuevo hecho institucional de carácter político, concebido y aprobado por acuerdo humano.

En la elección de Enrique Peñalosa como alcalde de la ciudad de Bogotá para el periodo comprendido entre 2016 y 2019, una vez se hubo realizado el procedimiento de inscripción como “candidato a la Alcaldía del Equipo por Bogotá, con el apoyo de Cambio Radical” (El Tiempo, agosto 31 de 2015), promulgado y divulgado su programa *Bogotá, mejor para todos* según el cual “La prioridad en las distintas acciones la tendrán niños y jóvenes, usuarios de transporte público, ciclistas y peatones. Uno de los grandes ejes de su administración será poner al día a la

capital en vías, transporte y espacio público” (El Tiempo, agosto 31 de 2015), como también se surtieron los demás trámites (poderes procedimentales) establecidos por el sistema electoral.

Los mencionados actos institucionales están concatenados con otros, por tratarse de un sistema en el que existen reglas y regulaciones para la publicidad, el uso de medios radiales y televisivos, a fin de que se puedan expresar ante los posibles votantes sus compromisos. Es decir, existe un sistema reglado para las jornadas electorales, un engranaje institucional, un sistema de apelaciones y reclamaciones, una declaratoria de la designación, un acto de posesión donde *X* pasa de ser un simple ciudadano a convertirse en *Y* en el contexto de la Alcaldía *C*. Todo ello, producto de la intencionalidad colectiva. El mencionado contexto *C* implica: un sistema político cuya cúspide, como se consignó al inicio de este ejemplo, está en la Constitución Política y las Leyes (reglas constitutivas) y un conjunto de normas que regulan el funcionamiento del sistema (reglas regulativas).

Además, para que funcione este hecho institucional como tal existe un trasfondo de prácticas políticas, partidos, creencias, necesidades y deseos de los electores que adhieren a tal o cual idea que fue expresada en enunciados de campaña, tales como *Bogotá tendrá metro*, por ejemplo, que en el caso del alcalde Peñalosa parece haber sido clave para los electores, teniendo en cuenta sus necesidades de transporte público ágil, seguro y oportuno.

Con la realización de la jornada electoral y el escrutinio donde el hecho de obtener un número de votos válidos y mayoritarios frente a los demás candidatos cuenta como ganar, la regla constitutiva para la creación del hecho institucional procede del siguiente modo: *X (Peñalosa) cuenta como Y (Alcalde) en C (para Bogotá en el periodo 2015 – 2019)*, lo cual significa que se ha surtido el proceso de creación de este poder institucional que, a su vez, conlleva la imposición de una intencionalidad colectiva de estatus, la cual puede expresarse bajo

el siguiente enunciado: *X cuenta como Y en C (S Hace A)*, lo cual se traduce en: Peñalosa cuenta como Alcalde de Bogotá 2015-2019 porque Peñalosa toma posesión de la Alcaldía y a su vez adquiere un compromiso deóntico con el marco legal y su programa de gobierno. Así mismo, este acto implica que la intencionalidad colectiva impuesta a X (Peñalosa) conlleva que para nosotros (los votantes de Bogotá) que S tiene poder, por lo cual Peñalosa puede hacer A (posesionarse).

Esta secuencia de hechos y de efectos institucionales, tanto en los agentes implicados como en la institución, reafirma el planteamiento de Searle sobre que los hechos institucionales “tienen consecuencias mañana y en un indefinido futuro” (1997, 53) Por consiguiente, cuando el alcalde jura en el acto de su posesión cumplir con la Constitución y las leyes, al pronunciar dicho juramento, adquiere compromisos y responsabilidades cuyo cumplimiento es exigible por los electores o ciudadanos. Pero, a su vez, dicha posesión se ha llevado a cabo merced a la intencionalidad colectiva mayoritaria expresada mediante la aprobación de su Programa *Bogotá mejor para todos*, de los grupos políticos que lo apoyan en su candidatura o, incluso, como un acto terminal de rechazo a otros candidatos presentes en la contienda electoral o a las políticas de su antecesor en la Alcaldía (Gustavo Petro Urrego).

Se insiste, entonces, en que la creación y mantenimiento de relaciones institucionales de poder mediante funciones de estatus por la acción colectiva, demandan una constante vigilancia y unos ajustes permanentes para que la colectividad siga sintiéndose representada. En tal sentido, en el Sistema Electoral colombiano existe la revocatoria del mandato, mecanismo consagrado en la Ley 134 de 1994, para que los colombianos puedan “ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual

los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.”

La aplicación de este mecanismo es posible dado que el programa de gobierno también trae consecuencias, ya que el poder es siempre la posibilidad de hacer algo o de impedir que otro haga algo cuando no cumpla con determinadas condiciones,

El mecanismo de revocatoria de mandato está diseñado para defender el voto programático. En consecuencia, los habitantes de un determinado municipio o de un departamento de Colombia pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos cuando exista insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor del mandatario o mandataria, o se presente incumplimiento del Programa de Gobierno.⁵

El acto de revocatoria de mandato, entonces, se concatena con los actos institucionales previamente mencionados, en los cuales Bogotá D.C. como colectividad humana que llevó a cabo el proceso de constitución del candidato Peñalosa como Alcalde (X), aceptando que como Y tenía el poder para gobernar en C (como acto terminal) da lugar, a su vez, a nuevos entrelazamientos de hechos institucionales. Por consiguiente, ciudadanos inconformes con su gestión, opositores al movimiento político que él representa o indignados con el incumplimiento de su programa gubernamental recurren a las reglas del juego establecidas en el marco constitucional y legal en el que se ejerce el poder, impulsando el trámite de la revocatoria de su mandato. Tal como lo señala Searle: “los poderes convencionales son creados o destruidos” (1997, p. 117) Y esos actos de creación o de destrucción del poder pueden ser ejercicios de poder convencional o pueden simplemente crecer, como cuando un grupo acaba aceptando gradualmente a alguien como su dirigente, sin que medie candidatura alguna o elección formal de ningún tipo, tal como se ilustra a continuación.

⁵ <http://www.registraduria.gov.co/Registraduria-presenta-20.html>

Cómo se crean poderes por fuera de la institucionalidad formal.

Dos hechos sociales mediante los cuales se expresan poderes creados dentro de informalidad también nos permiten ilustrar cómo funcionan los planteamientos de Searle ante la creación de hechos institucionales.

El primero de ellos hace referencia a las fronteras invisibles que existen en ciertas comunidades esto es, líneas divisorias territoriales simbólicamente reconocidas y aceptadas de modo tal que afecta sus vidas. ¿Cómo se constituyen? ¿En qué momento algunos de los habitantes pierden el derecho de transitar por dicho territorio, mientras que otros adquieren el derecho de impedirlo? Hay en esas barreras una intencionalidad colectiva que constituye ese límite simbólico para indicar que más allá de él solamente unos pueden y otros no pueden transitar so pena de la muerte. Aquí no existe un obstáculo físico tangible, aunque sí unas coordenadas sociales que lo marcan y delimitan simbólicamente. Como lo propone Searle, en este caso “colectivamente se le ha asignado un nuevo estatus, el estatus de un marcador de fronteras” (Searle, 1997, p. 57). Los humanos han impuesto funciones a una calle, una marca, que en otras circunstancias no las tendrían o que, incluso antes, la misma calle no las tenía; al mismo tiempo otros asumen la existencia de ese poder, lo reconocen y lo aceptan. Sin duda, este hecho social, siguiendo a Searle:

Requiere cooperación humana continua en las formas específicas de aperebimiento, aceptación y reconocimiento de un nuevo estatus al que se le asigna una función. Este es el punto de partida para todas las formas institucionales de la cultura humana, y siempre debe tener la estructura *X vale como Y en C*” (1997, p. 58)

A medida que este nuevo estatus institucional adquiere mayor relevancia se acompaña de nuevos hechos y de actos de habla explícitos (grafitis, amenazas, muertes ejemplarizantes, comunicados, etc.), según reglas estrictas, las cuales se constituyen ellas mismas en actos

institucionales puesto que estructuran sistemáticamente funciones de estatus. Sin duda en ese proceso se recurre a un elaborado aparato de “prestigio” -basado en el temor o el terror- por medio del cual se garantiza el reconocimiento y se mantiene la aceptación de dichas funciones. Frente a estas situaciones el autor afirma que “el reconocimiento de los individuos directamente implicados y un número suficiente de la comunidad garantiza la existencia de dichos hechos. Por lo tanto, debe darse una aceptación continuada de estatus o estos hechos dejan de existir en esa sociedad” (Searle, 1997, p. 128)

El segundo ejemplo remite a la institucionalización del clientelismo en Colombia como práctica habitual en las elecciones, bien sean nacionales o locales, parlamentarias o presidenciales, el cual ha constituido la compra y venta de votos como hechos sociales que responden a una intencionalidad colectiva, así las leyes lo consagren como un delito.⁶ Se ha producido en estos casos un cambio en la regla constitutiva del voto válido en el marco de la participación democrática según la cual: X (un voto) cuenta como Y (la adhesión a unas ideas) en C (el contexto de determinada elección), porque en estos casos, X (un voto) vale como Y (tejas, tamales, contratos públicos, dinero en efectivo) en el contexto C (cierta campaña para un determinado cargo de elección popular).

Ha llegado a tal punto la institucionalización de estos delitos como hechos políticos válidos, que cuando no hay compra o venta de votos la gente de esa misma comunidad se abstiene de sufragar porque considera que la participación necesariamente debe estar mediada por la obligación del candidato o de su partido político de entregar algo a cambio del sufragio en

⁶ En efecto, La Ley 1142 de 2007 o Código Penal Colombiano tipificó 11 conductas como delitos electorales, que atentan contra el libre ejercicio de la participación democrática. Entre ellos: el delito denominado **Corrupción al Sufragante**. Según el artículo 390 del Código Penal, “la persona que incurra en este delito es quien prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. El ciudadano que cometa este delito incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de 133,3 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.” <http://www.registraduria.gov.co/El-Codigo-Penal-Colombiano.html>

su favor (una dádiva, un favor, un intercambio material) que se convierten en nuevas reglas regulativas que rigen dicho acto institucional. Con razón señala Searle que “el poder sale de las organizaciones, es decir, de estructuraciones sistemáticas de estatus (...) pero las instituciones sobreviven en la aceptación” (1997, p. 129) por lo cual en muchos casos “se apela a un elaborado aparato de prestigio y de honor para asegurar el reconocimiento y mantener la aceptación” (1997, p. 129).

Conclusiones

En los estudios filosóficos contemporáneos son conocidos los aportes de John Searle al análisis sobre la naturaleza del lenguaje y su papel en la construcción de la realidad y su ontología social tiene gran fuerza explicativa frente a la constitución de los hechos institucionales, entre ellos el poder. Sin embargo, en el campo de la Ciencia Política poco se ha incursionado en esta ontología para explicar cómo surge y cómo se mantiene el poder institucional.

No obstante, en el presente trabajo se ha podido constatar el potencial teórico y el valor interpretativo de la ontología social para ampliar y enriquecer las perspectivas de análisis que habitualmente orientan las investigaciones sobre el poder y las instituciones, puesto que, salvo trabajos recientes situados en el Institucionalismo Discursivo⁷, el lenguaje no se incorpora como elemento constitutivo de realidad social, sino como simple instrumento de comunicación. En consecuencia, el lenguaje no cuenta como condición de existencia de hechos sociales e institucionales, pese a que, desde el giro lingüístico, el giro pragmático y el giro hermenéutico se ha reconocido su papel como sistema de representación y simbolización que posibilita la

⁷ Por ejemplo, Schmidt, (2008). Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. En: Annual Review of Political Science Vol. 11:303-326.

constitución de hechos sociales y la construcción de la intencionalidad colectiva orientada a crear o destruir los poderes.

Por otra parte, se destaca en el presente trabajo el aporte de la categoría de trasfondo que ha permitido situar un marco de producción e interpretación de los hechos sociales e institucionales en tanto que éstos, aislados de cualquier realidad humana, estarían vacíos de sentido. El trasfondo se sitúa como elemento fundamental de la interpretación de la realidad en la que se desarrollan actitudes y se realizan acciones de los humanos, siempre sustentadas en el lenguaje, tanto las de creación como las que se orientan a la destrucción de los poderes convencionales. El trasfondo es fundamental para comprender por qué la gente toma ciertas decisiones o asume de forma consciente o no tan conscientes determinadas posiciones frente a los poderes.

Igualmente, la regla constitutiva *X cuenta como Y en C* ha sido una herramienta adecuada para la comprensión de la manera como se crean o destruyen los hechos institucionales y mediante su aplicación se ha constatado que *C* (contexto), está determinado por el trasfondo, por lo cual, *C* (contexto) no se entiende simplemente como marco en el cual se realizan los hechos, o como contexto situacional o espacio psicosocial de producción e interpretación de la realidad, sino como una categoría muy compleja que define la acción humana.

En general, los mencionados conceptos permitieron explicar cómo se relaciona el poder deóntico con el poder en general y con el poder político en particular, en cuanto que el poder expresa una capacidad o habilidad que puede manifestarse a través de determinados hechos, tal como se muestra en los ejemplos analizados. La aplicación de la teoría de Searle a diversos hechos constitutivos del poder institucional permitió responder en qué medida puede aportar la propuesta ontológica de Searle a la comprensión del poder político en nuestro contexto.

Bibliografía

Código Penal Colombiano En: <http://www.registraduria.gov.co/El-Codigo-Penal-Colombiano.html>

Constitución Política de Colombia. Tomado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>

Revocatoria del mandato. En: <http://www.registraduria.gov.co/Registraduria-presenta-20.html>

Searle, J.L. (2014). *Creando el mundo social: La estructura de la civilización humana*. Barcelona: Paidós.

_____ (2006). Los principios básicos de la ontología social. Publicado en “Teoría sociológica analítica”. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010, pp. 63 – 83.

_____ (2005). *Libertad y neurobiología. Reflexiones sobre el libre albedrío, el lenguaje y el poder político*. Barcelona: Paidós.

_____ (2003). *Social Ontology and Political Power*. Recuperado en: <http://ist-socrates.berkeley.edu/~jsearle/290-04-01.pdf>

_____ (2001). *Mente, lenguaje y sociedad*. Madrid: Alianza Editorial.

_____ (1997). *La Construcción de la Realidad Social*. Barcelona: Paidós.

_____ (1992). *Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de la mente*. Madrid: Técnos.

Schmidt, (2008). *Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse*.

En: *Annual Review of Political Science*. Vol. 11:303-326.